El experimento neoliberal incubó la crisis en Chile

ANNA KOWALCZY :: 07/12/2019

Abordar los asombrosos niveles de desigualdad requerirá una ruptura con el dogma neoliberal, un movimiento inconcebible para el multimillonario presidente y sus amigos

El color rojo en el mercado bursátil chileno y el desplome del valor del peso no han sido causados por déficits fiscales, burbujas económicas o la postura política del gobierno. Por el contrario, Chile ha sido elogiado por la solidez de sus políticas macroeconómicas y fiscales, así como por la fortaleza de sus sectores financieros y bancarios. Su actual gobierno de derecha, encabezado por el multimillonario presidente Sebastián Piñera, es un defensor de la inversión extranjera y ha llegado a prometer beneficios para los contribuyentes corporativos.

Los orígenes del malestar económico actual son sociales. El modelo económico fundamentalista de libre mercado de Chile, con sus desigualdades extremas, el aumento de los costos de vida y la volatilidad, ha llevado a la gente a la desesperación. Con el gobierno apoyando cada vez más a los intereses corporativos, un creciente sentido de la injusticia ha llevado a la gente a salir a las calles. Se necesitará un cambio estructural profundo para satisfacer sus necesidades.

La agenda neoliberal

El modelo económico de Chile, con sus políticas monetarias y fiscales "responsables", fomenta fundamentalmente la desigualdad. Se basa en un gasto social bajo, medidas redistributivas débiles, una economía basada en la extracción de recursos económicos, la privatización del agua y un sector privado fuerte responsable de la provisión de servicios sociales.

Si bien los fondos de pensiones privados, las aseguradoras de salud y las universidades han reportado ganancias récord, los hogares chilenos han experimentado lo contrario: largas horas de trabajo, servicios deficientes, pensiones de miseria, precios en aumento y una deuda familiar cada vez mayor. A los exportadores de salmón, aguacate y madera les va bien; el resto enfrenta contaminación y severa escasez de agua.

Chile tiene uno de los coeficientes de desigualdad más altos del mundo, por lo que ha recibido amplias críticas. El Banco Mundial y la OCDE, e incluso consultores empresariales, han estado pidiendo durante años mayores medidas redistributivas en Chile, pero el crecimiento económico del país y el mercado de valores de alto rendimiento han hecho que sea conveniente hacer la vista gorda a las consecuencias sociales de los efectos en Chile del modelo económico.

Las desigualdades de Chile aumentaron drásticamente durante la dictadura de Pinochet (1973-1989). La liberalización sin precedentes del comercio y las finanzas en la década de 1970 estuvo acompañada por una notable disminución de los impuestos corporativos y patrimoniales y la eliminación de las exenciones del impuesto al valor agregado para los

productos básicos mediante la introducción de una tasa fija, lo que hizo que el sistema impositivo fuera extremadamente regresivo.

A lo largo de la década de 1980, se implementaron políticas agresivas que ayudaron a concentrar la riqueza en manos de la élite chilena. Los altos subsidios públicos se utilizaron para rescatar a los bancos locales y grupos económicos en quiebra después de la crisis financiera de 1982-83; la provisión de servicios públicos (educación, salud y pensiones) fue privatizada; la reforma del mercado laboral prácticamente eliminó el derecho a negociaciones colectivas y huelgas; y se otorgaron beneficios adicionales para los contribuyentes y compradores de bienes de lujo.

La Concertación y la Nueva Mayoría, coaliciones de centroizquierda que gobernaron Chile durante la mayor parte del período posterior a la dictadura (1990-2009; 2014-2017), lograron brindar un poco de alivio a los más pobres del país, colocándolos justo por encima de la línea de pobreza (los hogares en extrema pobreza disminuyeron del 10.6 al 3 por ciento entre 1990 y 2011; aquellos en pobreza del 22.7 al 6.2 en el mismo período). También lograron reducir ligeramente la desigualdad social desenfrenada del país (entre 1990 y 2011, el coeficiente de Gini pasó de 52.1 a 49.1. Dicho esto, esta disminución no fue constante: en 2000, el Gini llegó a 54.9, antes de comenzar a bajar de nuevo)

Pero la desigualdad en Chile no solo se mide por los niveles de ingresos. Los servicios estatales están en peligro. Para aquellos en trabajos mal pagados (la mitad de los trabajadores de Chile reciben el equivalente de US$500 o menos, en uno de los países más caros de América Latina), hay disponible una atención de salud pública muy básica y con poco financiamiento, de muy baja calidad.

El acceso a la seguridad social, que se proporciona a través de empresas privadas, solo está disponible para aquellos que trabajan en el mercado laboral formal. Para aquellos que trabajan informalmente (casi el 40 por ciento de la población activa), solo existe la cobertura más básica: el 50 por ciento de los pensionados recibe una pensión que vale menos de la mitad del salario mínimo (actualmente establecido en US$400). Esta total falta de seguridad social ha significado que la mayoría de los chilenos vivan en un estado permanente de estrés e incertidumbre.

Punto de quiebre

No es casualidad que las protestas masivas de Chile estallaran durante el tiempo de Piñera en el cargo. Piñera ganó la presidencia en 2017, en gran parte con la promesa de un retorno a los niveles de crecimiento económico excepcionalmente altos observados durante su mandato anterior en 2010-2013 (la coalición de izquierda de Michelle Bachelet gobernó en el ínterin). En el contexto de la desaceleración de la economía global, especialmente la caída de los precios de los recursos naturales de los que depende la economía chilena, fue una promesa que no se pudo cumplir; los salarios y las tasas de empleo se desplomaron bajo el gobierno de Piñera.

Ahora hay mucho para inspirar ira. La colusión corporativa ha obligado a subir los precios al consumidor (ejemplos recientes han involucrado pañales, papel higiénico, medicamentos y pollo); el desvío de fondos públicos para gastos privados (a menudo por miembros de la

policía y las fuerzas armadas) es un caso común; y los evasores de impuestos corporativos quedan impunes: los llevados a los tribunales simplemente son condenados a clases de ética obligatorias.

Si estas quejas no fueron infrecuentes durante el período posterior a la dictadura, la proximidad del gobierno de Piñera a los intereses corporativos ha hecho que sea más difícil mirar hacia otro lado. Tratar al público con una arrogancia al borde de la parodia empeora las cosas. Véase, por ejemplo, el Ministro de Hacienda, quien en las semanas previas a la insurgencia llamó a Chile a "orar por la economía". Mientras tanto, frente a las críticas populares sobre los aumentos de las tarifas de transporte, el Ministro de Desarrollo Económico aconsejó a los chilenos que levantarse temprano para evitar las tarifas más caras de las horas punta. Esto en una ciudad donde un día de trabajo de nueve horas no incluye una pausa para el almuerzo, y los viajes en transporte público a menudo tardan entre una y dos horas en cada sentido .

Reacción espontánea contra un proyecto utópico

Las protestas estallaron el 18 de octubre en respuesta a la decisión del gobierno de utilizar la policía armada para tomar medidas enérgicas contra los estudiantes de secundaria que evaden las tarifas. El toque de queda impuesto por Piñera y los informes de violencia y tortura policial desproporcionada revivieron el trauma de la dictadura de Pinochet y la ira popular a veces se ha expresado a través de incendios provocados, el saqueo de supermercados y farmacias, y violentos enfrentamientos con la policía.

Desde el 18 de octubre, ha surgido un nuevo movimiento popular. Sin un liderazgo centralizado y articulando solo las demandas más amplias (justicia, dignidad y, más recientemente, la renuncia de Piñera), se ha centrado en mantener la unidad popular a través de marchas regulares, con cacerolazos, golpes de ollas y sartenes, y alentar a los vecindarios a autoorganizarse en reuniones. Desde cualquier punto de vista, el movimiento no parece estar impulsado por ningún proyecto ideológico en particular; más bien expresan un espíritu pragmático y una amplia gama de intereses sociales afectados por el modelo económico.

Además de varias fuerzas de izquierda que han estado apoyando las manifestaciones, ciertos empresarios también se han presentado para hablar sobre la necesidad de un cambio. Hay informes de que su participación ha producido tensión entre las asociaciones empresariales clave; Es posible que la explosión popular haya ampliado ciertas fisuras dentro de las clases dominantes.

La insatisfacción con Piñera está aumentando en toda la sociedad, incluso cuando el gobierno intenta sembrar la división. Piñera ha intentado pintar las protestas como violencia pura, despojándola de su contenido político, o como el trabajo de un enemigo poderoso, como la Venezuela de Maduro.

No obstante, las encuestas muestran que el apoyo a la administración de Piñera es solo del 14 por ciento, un mínimo histórico en Chile. Por otro lado, más del 85 por ciento de los encuestados respaldan las protestas. En un intento por responder a la reacción popular, el gobierno ha revertido el repudio al alza de las tarifas de transporte, así como revertir el

reciente aumento en los precios de la electricidad. Pero nada más sustancial ha sido propuesto.

El gobierno ahora ha prometido trabajar en la agenda social, aunque interpreta erróneamente la crisis actual como un problema de ingresos que puede resolver mediante modestas transferencias directas de efectivo. Promete aumentar la pensión básica en un 20 por ciento, introducir un nuevo seguro médico obligatorio (y privado) para enfermedades graves y aumentar el salario mínimo de US$400 a US$470 a través de un subsidio público.

Todo esto implica esencialmente transferencias públicas de riqueza a proveedores privados de seguridad social, que ya obtienen grandes ganancias de los servicios que prestan. En cualquier caso, las reformas propuestas por el gobierno tienen poca relación con la seguridad social de casi la mitad de la población, que existe en el mercado laboral informal.

Mirar a las calles

Abordar las demandas sociales requerirá un aumento del gasto público, lo que significará una ruptura con el dogma neoliberal, un concepto ajeno al gobierno actual. Las medidas necesarias pondrían un límite al aumento exponencial de la riqueza de las clases dominantes de Chile, lo que a su vez reduciría el crecimiento económico e implicaría una fuga de capital.

Pero cegado por su liberalismo económico fundamentalista, el gobierno percibe que la planificación, la regulación y el control son inherentemente peligrosos para el sistema económico. Es poco probable que cambie de rumbo, a pesar de que tal inflexibilidad amenaza la destrucción de todo lo que aprecia. Al mismo tiempo, los partidos de oposición han luchado para participar en el movimiento, y los miembros del parlamento están sufriendo índices de confianza pública críticamente bajos.

La codicia inherente al liberalismo de mercado destruye los cimientos sociales sobre los cuales se erigió el sistema económico global. Donde estas contradicciones no pueden resolverse, es probable que la violencia y la inestabilidad política se intensifiquen. En Chile, estas bases sociales están bajo tanta presión que el sistema amenaza con colapsar por completo. Muestra que los ataques del neoliberalismo no pueden continuar indefinidamente.

www.herramienta.com.ar

---

https://www.lahaine.org/mundo.php/el-experimento-neoliberal-incubo-la